

Guillermo Almeyra

En Argentina, en diciembre de 2004 un incendio en un local para bailes sin salida de emergencia y con el doble de clientes de lo permitido causó la muerte de 194 personas y heridas a otras 1432. El local funcionaba gracias a la corrupción de los funcionarios y policías que debían controlarlo. En febrero de 2012, un tren cargado de pasajeros embistió la estación Miserere en Buenos Aires, con un saldo de 49 muertos y 600 heridos: la empresa privada que administra el ferrocarril no invirtió en mantenimiento o seguridad y dos sucesivos Ministros nacionales de Transporte corruptos la cubrieron. Desde entonces no hay cambio alguno en el transporte ferroviario, que es una bomba de tiempo. La capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, sufrió inundaciones en 2002, 2005, 2008, 2010 y ahora, en 2013 colapsó ante unas fuertes lluvias que mataron 51 personas. En la capital del país, Buenos Aires, cada vez que llueve copiosamente se inundan barrios enteros y quedan durante días sin agua potable, sin luz, sin nada, de modo que miles de ancianos y niños quedan encerrados en los pisos superiores al tercero, sin baño, sin comida ni agua, sin medicinas ni ascensor y sin luz. Las calles empedradas, que drenaban las lluvias, fueron asfaltadas; nadie limpia las bocas de tormenta, que se tapan con la basura; donde antes había casas bajas, con jardín o terreno alrededor, donde habitaban una familia, se construyen torres de más 15 pisos, con cuatro departamentos por piso, que consumen agua, luz, gas y necesitan transporte o estacionamiento para sus coches. Sin embargo, no hay inversiones en electricidad, gas, desagües y las calles se transforman en depósitos de coches (que la inundación se lleva) o los autos de los ricos se guardan en las cocheras en los subsuelos (donde el agua los tapa durante días). Las plazas, que antes tenían césped y árboles que absorbían las lluvias, son ahora de cemento. Los arroyos afluentes del Río de la Plata han sido mal entubados y el drenaje hacia el río es imposible. Cerca de La Plata, para construir barrios para los ricos, han levantado el nivel de los terrenos de modo que el agua escurre hacia los barrios más bajos, poblados por pobres. La construcción de la autopista Buenos Aires-La Plata también se hizo elevando el nivel de la misma, pero sin hacer drenajes bajo la obra, de modo que la carretera se convierte en un dique natural. Aunque el servicio meteorológico decreta un alerta roja con fuertes lluvias, no se limpian las calles ni las cloacas y, por si fuera poco, las máximas autoridades de la ciudad de Buenos Aires o de La Plata, si va a llover en fin de semana, se van de vacaciones (en la reciente inundación el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, estaba en una playa brasileña, a 2 700 kilómetros, y su jefe de gobierno en Turquía, y el alcalde de La Plata, en el norte brasileño). No sólo no existe la menor coordinación entre la Capital Federal y la provincia lindante, aunque el agua no reconoce fronteras políticas sino que, además, el gobierno nacional, en su pugna política con ambos gobiernos, se despreocupa ante los problemas de los habitantes y apuesta al desprestigio del alcalde de Buenos Aires y del gobernador de la provincia de Buenos Aires si no pueden resolver nada. El capital necesita que

los trabajadores ganen poco y vivan mal en barrios inadecuados porque eso los abarata y aumenta por consiguiente las ganancias. La especulación inmobiliaria los arroja además a los suburbios, en zonas técnicamente inhabitables. Los gobiernos nacional o municipal cierran los ojos ante este problema. El gobierno nacional, que basa la economía en la exportación de cereales, no hace nada ante la deforestación del territorio nacional y la extensión continua del cultivo y de la exportación sobre todo de soya por unos pocos oligopolios que controlan el ingreso de las divisas extranjeras y el resultado es la concentración de la población rural en las ciudades y la destrucción de suelos y del sistema hídrico, además de la desertificación que cambia el clima y no protege la vegetación nativa, reguladora de las privatizaciones. A eso se agrega que el recalentamiento global tiene un responsable claro: el tipo de industrialización depredador, sobre todo en los países altamente industrializados. ¿Qué hay de “natural” en todos estos delitos y crímenes, en esta utilización clasista de los bienes públicos, en esta total despreocupación por la naturaleza y por los trabajadores y los pobres? Los muertos han sido asesinados por un sistema criminal, los destrozos que ascienden a varios miles de millones de dólares (entre 5 y 6 mil millones, se calcula) fueron causados por ineptos, especuladores, corruptos. Lo “natural” es político.

Como en el Distrito Federal, en México, cuando el terremoto de 1985, mientras las autoridades brillaban por su ausencia a la hora del rescate y de la ayuda, centenas de miles de voluntarios, sobre todo jóvenes, ayudaron a los inundados, les trajeron ropa, alimentos, abrigos. En los barrios los vecinos salvaron a la viejita de al lado, a los niños, albergaron a los que habían perdido todo. Además, están exigiendo organizadamente, con manifestaciones, la reanudación de la luz, de los servicios esenciales y soluciones de fondo. Algunos barrios de clase media pobre comienzan a crear comisiones territoriales de vecinos. Aunque el gobierno nacional, en una tardía reacción, organizó una visita de la presidente a los barrios pobres de Buenos Aires y La Plata y movilizó a la juventud oficialista para distribuir ayuda, la mayor parte de ésta ha sido espontánea e inmediata y se organizó sin esperar a nadie. El gobierno nacional recuperó un poco de credibilidad, pero se produjo una ruptura entre los administradores al servicio del capitalismo y las víctimas de éste y reapareció la solidaridad de clase, volviendo a recuperarse en parte la autoorganización. En este año electoral y de crisis eso tendrá repercusiones políticas.